

4. España se blindada a la competencia

El marco regulatorio desincentiva la competencia entre empresas y muestra un cerrojo frente a las empresas extranjeras

Julio Pomés, Presidente de Civismo

Por qué Telefónica puede aspirar a controlar una gran parte de los mercados alemán o brasileño y, sin embargo, el Gobierno español bloqueó la posibilidad de compra por parte de la estadounidense AT&T, el pasado junio? Según los estudios del Institute for Management Development de la Universidad de Lausana, la eficiencia gubernamental ha caído del puesto número 40 al 50, de los 60 países incluidos en el ranking de Competitividad Mundial. Y gran parte de la culpa, la tiene la discrecionalidad del Ejecutivo, que se

sitúa en una posición alarmante comparada con otros países del entorno.

España ocupa el puesto número 51 en calidad del marco regulatorio, algo que “desincentiva la competencia entre empresas”, pero muestra un particular cerrojo frente a las empresas extranjeras. Así, el país se sitúa en la posición número 49 en cuanto a incentivos para la inversión extranjera. Más aun, la apertura de los contratos del sector público para empresas extranjeras ocupa la cuadragésima posición, y es la 37^a en cuanto a la apertura comercial.

Pero son todo tipo de empresas las que tienen dificultades para competir, no solo las extranjeras. El problema más grave son las ayudas públicas. Aunque la cifra en sí no es particularmente elevada (un 0,96% del PIB, una tercera parte menos que la media), están diseñadas de tal forma que distorsionan la competencia y perjudican gravemente el desarrollo económico (puesto número 52).

Además, las decisiones del Gobierno no se implementan de forma eficiente (47ª posición). El estudio se refiere a regulaciones que entran en vigor de forma imprevista, sin dar tiempo a que las empresas se adapten, a las que exigen un sobre coste que podría haberse evitado o a las que se introducen de tal forma que aumentan la judicialización, por ejemplo. Todo ello, además de las ineficiencias y duplicidades, provoca que la burocracia esté entre las que más dañan la actividad económica (50º lugar).

Otra amenaza para la libre competencia es la propiedad pública de las empresas, que compiten en muchas ocasiones en los mismos ámbitos que las privadas, limando los márgenes de beneficios y desincentivando la entrada de nuevas compañías en el mercado. España está en el puesto 47 en cuanto a

la negativa influencia que ejercen estas compañías sobre el mercado y el resto de las empresas. Por ejemplo, la dificultad de acceder a los clientes en igualdad de condiciones redonda en una escasa creación de empresas (puestos 56).

EL NEGRO AGUJERO FISCAL

El estudio también señala que el sistema tributario español está entre los más ineficientes del mundo, dado que desincentiva la actividad económica sin lograr apenas resultados. El IRPF es el noveno del mundo que más desincentiva el trabajo, pero es apenas el 38º en el ranking de recaudación con unos ingresos inferiores al resto (un 16,1% de la renta frente a una media del 17,8%), mientras que el Impuesto de Sociedades es el decimosexto que más lastra la actividad, pero el 52º en ingresos (un 1,8% del PIB, frente al 3,2% de la media).

Esto deriva en un muy mal funcionamiento del mercado de trabajo, a pesar de que España cuenta con un alto porcentaje de trabajadores cualificados (puesto 11). El informe critica la escasa capacidad para atraer y retener talentos (57ª posición), para formarlos (57ª en general, 53ª en el caso de las prácticas) o motivarlos (55ª), lo que ocasiona un gran daño por la fuga de cerebros (44ª).

Según un estudio, el sistema tributario español está entre los más ineficientes del mundo al desincentivar la actividad económica

Todo ello ha provocado que la calidad de las relaciones laborales esté en la posición 50 y que las jornadas perdidas por huelgas (un 3,7% del total entre 2009 y 2011) vayan más allá de duplicar la media mundial (1,7%).

Esta conflictividad, que ha retrasado el ajuste de sueldos hasta 2012, es una de las principales causas de la extrema falta de adaptabilidad de la economía española a los cambios de ciclo y a los nuevos sectores (54ª posición). Otra causa es la escasa creación de empresas, que ha provocado que la deslocalización sea una amenaza para la industria (puesto 43), la I+D (46) y los servicios (38). El capital extranjero apenas supone una entrada del 1,05% del PIB cada año (puesto 43) y eso redundará en una tremenda falta de diversificación en la economía (46).

Quizá uno de los mayores síntomas de las trabas burocráticas a la iniciativa privada sea que en España hay barre-

ras hasta para exportar. El país ocupa la 101ª posición mundial en este campo, 18 puestos peor que en 2007, de acuerdo con el ranking Doing Business que elabora el Banco Mundial. El organismo estipula unos costes burocráticos asociados a las ventas al exterior en torno a 950 euros por contenedor en 2012, lo que los sitúa en 3,9% por encima de los del año anterior y los eleva un 26% desde 2007. Unos trámites que son los más gravosos de la UE, por detrás de Luxemburgo y Rumanía. Un exportador español necesita cumplimentar al menos 5 trámites, frente a los 2 de Francia o los 3 de Suecia.

Referencias

- International Institute for Management Development (<http://www.imd.org/wcc/>) y Banco Mundial (<http://datos.bancomundial.org/>).